

Centro de consolidación regional de Bajo Cauca: desplazamiento forzado, dinámicas de violencia y acciones de estado*

Center of Regional Consolidation of Bajo Cauca: Forced Displacement, Dynamics of Violence and Actions Of State

LEÓN DARÍO MARÍN ARENAS**

Resumen

La puesta en escena de la Política de Seguridad Democrática, y más precisamente de las acciones complementarias como el Plan Nacional de Consolidación Territorial, permite analizar algunos elementos clave, acerca de la redefinición del mapa de violencia presente en ciertas regiones del país

Artículo recibido el 20 de febrero de 2012 / Aprobado el 20 de abril de 2012.

** El presente artículo es producto del informe investigativo presentado en el marco de la modalidad de Trabajo de Grado, realizado para la Unidad de Análisis y Evaluación de la Política Pública de Desplazamiento, adscrita a la Gerencia Técnica de Coordinación y Atención de la Población Desplazada de la Alcaldía de Medellín. Julio-diciembre de 2011.

Estudiante de Ciencia Política. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Email: ldmarina@unal.edu.co. Integrante del grupo de investigación: Política y Derechos Fundamentales.

y las distintas acciones diseñadas e implementadas tanto por el gobierno nacional, como por las administraciones locales. Dicha reconfiguración se puede observar desde diferentes perspectivas; sin embargo, se abordará, *grosso modo*, la relación existente entre el proceso de desmovilización paramilitar, a partir de la Ley 975 de 2005, y el surgimiento de las Bandas Criminales (BACRIM) después de 2006. Análisis que será implementado en las subregiones de Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño.

En ese sentido, es preciso mencionar que acorde a las temáticas enunciadas, se tendrán en consideración las tasas de desplazamiento forzado; las cuales constituyen un soporte importante para comprender ciertas realidades puntuales de estas subregiones del departamento. Ahora bien, para analizar la reconfiguración de las dinámicas de violencia –en especial su impacto territorial–, será oportuno valerse de las investigaciones que se adelantan en torno a los Centros de Consolidación Territorial (CCT), planteados estos como escenarios de confluencia y acción interinstitucional para *consolidar* los lineamientos trazados en la Política de Seguridad Democrática. Al respecto, lo planteado en el presente artículo tomará como sustento las estadísticas del Centro de Consolidación Regional (CCR) de Bajo Cauca; entidad que inició actividades formalmente a partir de septiembre de 2009, lo cual dificulta llevar a cabo una evaluación profunda de sus avances y logros.

Palabras clave: Dinámicas de conflicto, Plan Nacional de Consolidación Territorial, Bajo Cauca, Grupos Armados Ilegales, Tasas Desplazamiento Forzado.

Abstract

The staging of the Democratic Security Policy, and more precisely, the complementary actions such as the National Plan of Territorial Consolidation, allows analyzing some of the key points, about the redefinition of the violence map present in certain regions of the country, and the several actions designed and implemented by national government, and local administrations. This reconfiguration can be observed from different perspectives; however, we will take, *grosso modo*, the relationship between the process of paramilitary demobilization, from the Law 975

of 2005, and the emergence of Criminal Gangs, (Bandas Criminales–BA-CRIM), after 2006. This analysis will be implemented in the subregions of Bajo Cauca, North and Northeast of Antioquia.

In this regard, it is necessary to mention that will be considerate, as an argument, the forced displacement rates, which are a real fundament to understand specific realities in some subregions of the department of Antioquia. Now, to analyze the reconfiguration of the dynamics of violence –especially its territorial impact-, it will be suitable to take in mind the investigations about the Territorial Consolidation Centers, TCC, created such as spaces where converge interagency actions, which seek the *consolidation* of the guidelines of the Democratic Security Policy. In this way, the present article will take, as a support, the statistics of the Regional Consolidation Centers, RCC, of Bajo Cauca; state agency formally established in September 2009, which creates difficulties today to carry out a thorough evaluation of their advances and achievements.

Key words: Dynamics of violence, National Plan of Territorial Consolidation, Bajo Cauca, Illegal Armed Groups, Forced Displacement Rates.

Listado de abreviaturas

ANA	Autodefensas del Nordeste Antioqueño
AUC	Autodefensas Unidas de Colombia
Bacrim	Banda Criminal
BCB	Bloque Central Bolívar
BM	Bloque Mineros
CCAI	Centro de Coordinación y Acción Integral
CCR	Centro de Consolidación Regional
CODHES	Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado
DD.HH.	Derechos Humanos
D.I.H.	Derecho Internacional Humanitario
ELN	Ejército de Liberación Nacional
ERPAC	Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia
FARC	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
GAML	Grupos Armados al Margen de la Ley
MNR	Muerte a Revolucionarios del Nordeste
PNCT	Plan Nacional de Consolidación Territorial
PDS	Política de Seguridad Democrática
SANCT	Sistema Administrativo Nacional de Consolidación Territorial

Introducción

Ciertamente, las dinámicas que han afrontado las subregiones de Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño, las determina hoy como epicentros de todo tipo de análisis que pretenden interpretar diversidad de escenarios que confluyen en consecuencias de carácter humanitario para sus poblaciones, de un lado, y de insuficiencia estructural de atención y prevención para las entidades territoriales e instituciones de carácter nacional, de otro. Es por ello que se abordarán algunas temáticas que circundan las dinámicas sociales y políticas, en primera instancia y, en segunda medida, las acciones puntuales de Estado; asimilando todo ello, desde los escenarios de las tres subregiones del departamento de Antioquia que componen, desde 2009, el Centro de Consolidación Regional de la Política de Seguridad Democrática en Bajo Cauca.

En primer orden entonces, se establecerá una descripción acerca del escenario de violencia presente en esta zona del departamento, aclarando de entrada que si bien comprender las realidades de Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño se sale del objetivo del presente artículo, sí se podrá, en cambio, considerar algunas variables, que combinadas permitan plantear una panorámica breve de la situación más cercana en estas subregiones de Antioquia, acorde a las temáticas propuestas. El análisis contemplará un repaso ligero respecto de la configuración de algunas de las más relevantes organizaciones criminales y su estrecha relación con el proceso de desmovilización paramilitar adelantado en el territorio nacional desde el año 2005.

De otro lado, se traerá al análisis, el papel que juegan los *Centros de Consolidación y Acción Integral*, en su ánimo de *consolidar* los lineamientos planteados desde 2002, con relación a la recuperación social e integral del territorio nacional. Es por eso que se abordará, como es consecuente, el Centro de Consolidación Regional (CCR) de Bajo Cauca, creado a partir de la Circular 233 del 2 de septiembre de 2009. El objetivo central de este segundo aparte, será subrayar algunos ítems dispuestos en el marco general del Sistema Administrativo Nacional de Consolidación Territorial

(SANCT) aprobado en 2010¹ y, en esencia, antecedido por la Directiva Presidencial 01 del 20 de marzo de 2009, donde a través de la articulación de 14 entidades estatales, se puso en marcha el “cumplimiento del mandato constitucional de garantizar los derechos fundamentales de la población en todo el territorio nacional, y de focalizar acciones frente a las comunidades más vulnerables” (Presidencia de la República, 2010).

Dinámicas de Violencia en Bajo Cauca, Norte y Nordeste Antioqueño: El caso de las *Bacrim*

La última década para el departamento de Antioquia ha sido un transitar entre la búsqueda de estrategias de pacificación de ciertas zonas conflictivas y una constante crítica por lo efímero de las acciones puestas en marcha. Sin lugar a dudas, los procesos de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), o bien de sus integrantes, conocidos como *paramilitares*, produjeron, en múltiples zonas del departamento, una reconfiguración territorial del conflicto, que derivó en nuevas, o renovadas, disputas por el control de los cultivos ilícitos; la comercialización de narcóticos y armas; el cobro de “vacunas” a ganaderos, mineros, entre otros; el posicionamiento vial estratégico para salir o entrar a determinadas zonas del país, etcétera. En ese contexto, se pasará a relatar ciertos puntos clave en torno a la configuración (o reconfiguración si se quiere), de las dinámicas de violencia en las subregiones dispuestas para el análisis en el presente artículo.

Proceso de Desmovilización y Nacimiento de Grupos Armados Emergentes: El caso de las *Bacrim*

Uno de los ejes esenciales de la Política de Seguridad Democrática se fundamentó, desde 2002, en el proceso de recuperación integral del territorio y la seguridad nacional. En ese sentido, y como hito histórico, se decretó la Ley 975 de 2005 en el país, como la iniciativa que permitiría facilitar los procesos de paz. (Congreso de la República, 2005: Art. 1). Así, por ejem-

1 Presidencia de la República (2010). Decreto Número 2933: “Por el cual se organiza el Sistema Administrativo Nacional de Consolidación Territorial, se crea una comisión intersectorial y se dictan otras disposiciones”.

plo, “la desmovilización del Bloque Mineros y el Bloque Central Bolívar (frentes, Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio) marcó un giro en las dinámicas de conflicto armado”, puesto que lo desmanteló, dejando visibles tanto los actores, como las zonas geoestratégicas de estos en el departamento (Giraldo, 2011:52). Este escenario propició la reconfiguración de actores armados ilegales en diversas estructuras delictivo-criminales; situación que nutrió de manera significativa la reorganización del mapa de conflicto en Antioquia, principalmente, a partir del surgimiento de lo que las autoridades han dado en llamar “Bacrim”.

Comprender el escenario de las dinámicas de violencia existentes en las subregiones Norte, Nordeste y Bajo Cauca de Antioquia, implica generar una línea de tiempo con la que se puedan relacionar los actores y su nivel de influencia. Así, tenemos lo siguiente:

Desde los años ochenta, en zonas de Bajo Cauca, Norte y Nordeste se comenzaron a registrar acciones de corte paramilitar, tal como las de la agrupación *Muerte a Revolucionarios del Nordeste* (MRN). Luego, para los años noventa, se tiene en consideración lo propio con las *Autodefensas del Nordeste Antioqueño* (ANA). Sin embargo, es de relevancia analizar la creación concreta de las AUC para finales de la década de los noventa, grupo que marcó una diferencia notable frente a las tradicionales formas de actuar de estas agrupaciones. Para “el año 2000 se crea el Bloque Mineros, [...] el mismo es asumido por alias ‘Cuco Vanoy’ en el año 2002. Este bloque tuvo influencia en los municipios de Tarazá, Cáceres, Ituango, El Bagre, Remedios, Zaragoza, Anorí y el Sur de Bolívar [y]... Compartiendo el control del Bloque Mineros sobre el Bajo Cauca, estaba el Bloque Central Bolívar (BCB), bajo el mando de alias ‘Macaco’”. (Giraldo, 2011:52).

Dentro de las acciones contempladas para detener y remediar las atrocidades generadas por estas agrupaciones, se cuenta el proceso de desmovilización paramilitar, el cual trajo consigo un apaciguamiento del conflicto perdurable, por un breve lapso de tiempo. En esa medida, el proceso de desmovilización de los Bloques Mineros y Central Bolívar generados en 2006 y 2005, respectivamente, permitieron una cierta “estabilidad”, que luego cedería el paso por la conformación de las diversas BACRIM. Sin

embargo, un escenario sí era claro con la estructura paramilitar antes de su desmovilización:

En el pasado, las autodefensas y particularmente las AUC, servían como instancia que garantizaba la unidad del narcotráfico y a través de éstas se dirimían las contradicciones en su interior. De hecho, en las AUC convivían sectores tan variados como los que representaban los hermanos Castaño, Salvatore Mancuso, Diego Murillo Bejarano, alias *Don Berna*, así como Freddy Rendón Herrera alias *El Alemán y Cuco Vanoy*. Además de articular el narcotráfico, las AUC enarbolaban claramente un perfil antisubversivo y buscaban un reconocimiento político (Escobedo, 2009:163).

Ahora, las regiones “abandonadas” por las AUC se convirtieron en escenarios de competencia entre la guerrilla, narcotraficantes y nuevos actores –armados o no– de carácter ilegal. Disputas que han llevado al recrudecimiento de prácticas que otrora eran propias de los grupos paramilitares e incluso guerrilleros. La situación ha llegado a tal punto, argumentan Palou & Arias, que “la violencia actual en que incurren estos grupos se explica por la necesidad de dirimir quiénes serán los herederos del poder paramilitar. Se trata de una guerra por la hegemonía criminal, que es difícil de lograr” (2011b:9).

Es decir, el proceso de desmovilización conllevó a una inusitada reconfiguración de las dinámicas de violencia en los departamentos donde había mayor presencia de las AUC. El recrudecimiento actual se presenta como una confrontación criminal entre variados sectores nacientes y rearmados de dichas agrupaciones armadas ilegales. En un breve contexto histórico realizado por la Fundación Ideas para la Paz, se puede visibilizar, a grandes rasgos, la configuración de las que, tal vez, hoy son las agrupaciones más reaccionarias y con mayor influencia en las subregiones del departamento de Antioquia.

Los Urabeños nacieron bajo el mando de alias “Don Mario”, el cual comenzó a incursionar, principalmente, en Bajo Cauca a partir de 2006 y luego, con la toma del mando por parte de los hermanos Úsuga, se disciplinó de tal forma, que rápidamente extendieron su rango territorial de acción, hasta el punto que ocuparon territorios del Magdalena Medio, pertene-

cientes a las AUC años atrás. Actualmente “el sur de Córdoba sigue siendo su centro de operación, aunque hacen presencia en Puerto Valdivia, Cauca, Nechí y, notablemente, en la Comuna 8 de Medellín”.²

Por otra parte, y estando en confrontación directa con *Los Urabeños*, surgieron *Los Paisas*, teniendo entre sus principales líderes a alias “Chepe”, “Mono Vides” y “Puma”. No obstante, la situación que más ha dificultado la estabilidad de esta agrupación, es su profundo fraccionamiento; situaciones que han promovido la proliferación de células que terminan en bandos de otras organizaciones. Como ejemplo se tiene la ex-célula encabezada por alias “Sebastián” (asesinado en julio de 2011), la cual se aliaría con *Los Urabeños*, en contra de *Los Rastrojos*. La situación ha llegado a tal magnitud, que agrupaciones como *Los Paisas* han entablado relaciones, en materia de seguridad, con los Frentes 18 y 57 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).³

Según informes presentados por distintas ONG, *Los Rastrojos*, ubicados en el Bajo Cauca, son en su mayoría ex paramilitares del Bloque Mineros y tienen una enfática disputa contra *Los Urabeños*. Después de mucho indagar, se logró descubrir que el hoy muerto alias “Sebastián”, era su líder; quien logró encontrar en Daniel Barrera, alias el “Loco Barrera”, una posible alianza con las FARC, en su lucha contra *Los Urabeños*.⁴

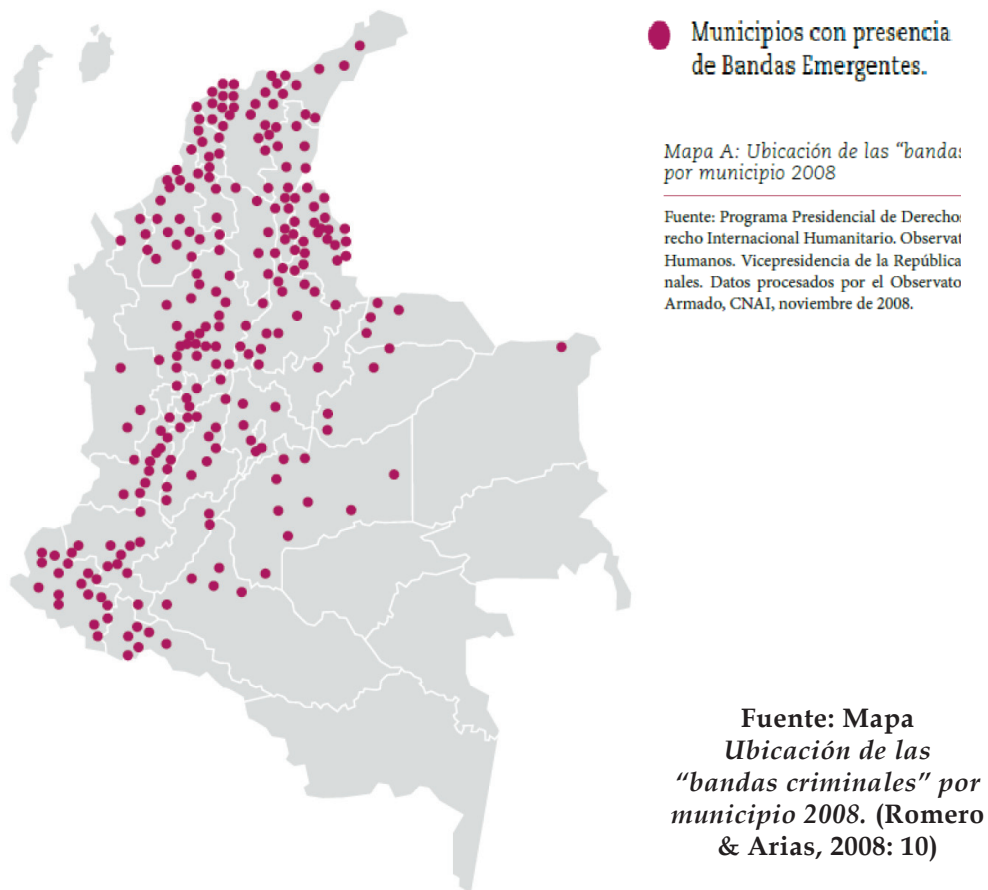
En el Gráfico 1 se puede observar la presencia de las Bacrim en el territorio nacional para 2008; contando con que en los últimos tres años, estas agrupaciones han fortalecido su presencia en dichas zonas, e incluso se han desperdigado por otras más.

2 Bajocauca.com, 11 de julio de 2011.

3 *Ibidem*.

4 Respecto de la información descriptiva en torno a la conformación de las *Bacrim* y las disputas generadas entre ellas, ver: (Palou & Arias, 2011b:7-11).

Gráfico 1. Presencia de Bacrim en el Territorio Nacional



Respecto al Departamento de Antioquia, la situación no es menos compleja. Actualmente es el epicentro de múltiples organizaciones criminales, enfrentadas entre sí en muchos casos, pero en otros, inusualmente aliados. En el siguiente gráfico (producto de una investigación adelantada por Javier Alexander Macías para el periódico *El Colombiano*), se puede visualizar una idea acerca de la presencia de los más importantes cabecillas de las *Bacrim* en el departamento de Antioquia y sus zonas de influencia:

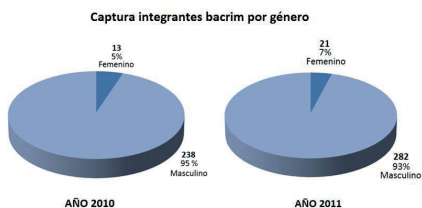
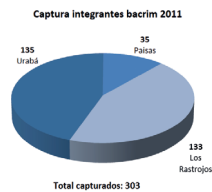
Gráfico 2. Ubicación Líderes de Bacrim en Antioquia



Fuente: Guerrilla y Bacrim, de la mano en Antioquia.
(Macías, 10 de julio de 2011)

Zonas y Cabecillas de las bacrim en Antioquia

Bacrim "Los Rastrojos"			
1. (Cáceres, Zaragoza, El Bagre). Cabecillas			
"Comba"	"Sebastián"	"Brandon"	
"Jhony o Tomás"	"Care Lata"	"Victoria o 18"	"Neko"
2. (Segovia y Remedios)			
"Alex 15"	"El Oso"	"Nano"	
"Milton"	"El Calvo"	"Vaca"	
Bacrim "Los Urabeños"			
3. "Arboleda" "Marcos" "Kevin"			
"Fenner" "Flaco"			
4. "el Paisa" "el Patrón" "Lucho"			
5. "el Flaco" "H-20" "Cucaracho"			
"Monaliza" "Robinson"			
6. "Oto o Mauricio" "Giovanni" "Gavilán" "Rodrigo"			
Bacrim Bajo Cauca y Norte			
7. "400" "Uber" "Anadecto"			
"Víctor o Guajiro" "Richard"			
Bacrim "Los Paisas" Bajo Cauca			
8. "Chepe" "Puma" "Sangre" "Tabaco"			
"6-7" "Tarro" "Raúl" "Morroso"			



El gráfico anterior constituye una ilustración acerca del complejo plano en el cual se encuentran varias subregiones, en tanto su posición geográfica, su entorno económico, sumado al precario papel del Estado en su accionar frente a la diversidad de problemáticas existentes; las cuales convierten ciertas zonas del territorio nacional en epicentros donde confluyen fácilmente vestigios del conflicto armado; nuevas dinámicas de violencia; actividades económicas ilegales; altas tasas de homicidio, desplazamiento, desaparición forzada; y todo tipo de modalidades extorsivas. Es preciso recordar lo escrito por Óscar Montes, para quien el no-actuar del Estado se convierte en la pieza esencial para que el conflicto se extienda:

La guerra de Bajo Cauca antioqueño no demorará en expandirse por la Región Caribe, como se extendió a mediados de los 80 el fenómeno paramilitar, que para desgracia nuestra terminó por estigmatizarnos como una región “pro-paras”, cuando la realidad es que ese flagelo fue importado del interior del país. Nosotros, que jamás nos involucramos en ninguna guerra, nos quedamos con el pecado y sin el género. Hoy los costeños somos los “amigos de los paras” y los paramunos sus más encarnizados enemigos. Ver para creer en este país del Sagrado Corazón. (Montes, 2011).

Para culminar con este aparte, se hará mención a una serie de acciones puestas en marcha por parte de las dos administraciones del ex presidente Álvaro Uribe, las cuales se quedaron cortas en el objetivo de resolver las dinámicas de violencia en la parte norte del departamento de Antioquia. Hoy, las diferentes realidades allí presentes, permiten observar cómo se han recrudecido y reproducido estas dinámicas, que lejos de extinguirse, se complejizan. Así pues, el proceso de desmovilización quedó en deuda desde el momento en el cual, hoy día, y según la Revista Semana:

...se calcula que de los 63 jefes de estos grupos capturados hasta comienzos de año, 53 por ciento vienen de las AUC. Algunos expertos señalan que estas bandas reclutan militares retirados, al igual que lo hacían los paramilitares. En Córdoba, Bajo Cauca, Valle y Nariño operan con métodos de control territorial, con uniformes y armas largas. Han revivido masacres y amenazas a líderes populares y del movimiento de víctimas, y, según Acción Social, fueron responsables del desplazamiento de 133.000 personas entre 2007 y 2010 (Verdadabierta.com, 2011).

Sistema Administrativo Nacional de Consolidación Territorial: Análisis del Centro de Consolidación Regional de Bajo Cauca

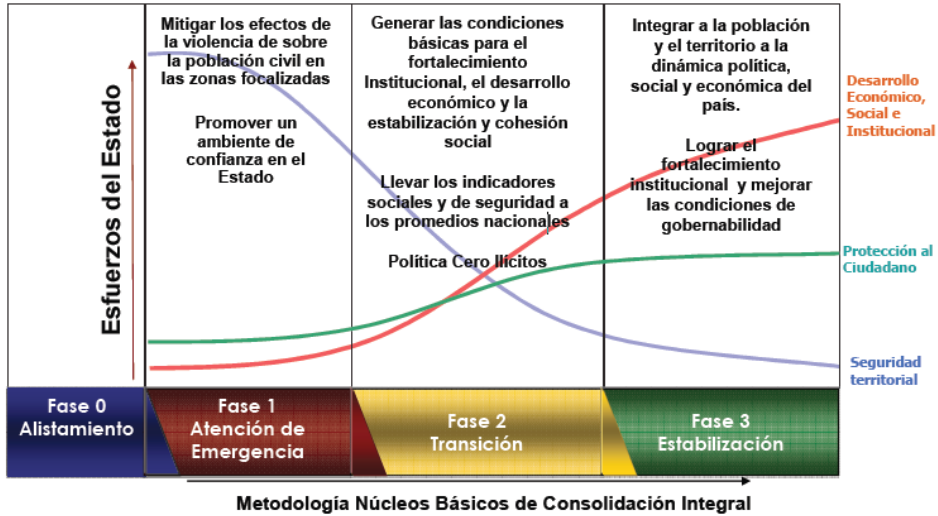
El Plan Nacional de Consolidación Territorial (PNCT) tiene sus raíces más profundas en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, Estado Comunitario: Desarrollo para todos. En este, se acordaron cinco objetivos estratégicos, con los cuales se buscaba *consolidar* los lineamientos diseña-

dos en la Política de Seguridad Democrática (PDS) y algunas acciones establecidas en el Plan Colombia. Estos objetivos fueron:

1. Consolidar el control territorial y restablecer la autoridad del Estado en todo el territorio nacional.
2. Generar, a través del uso legítimo de la fuerza y la política social, las condiciones de seguridad y bienestar social que presionen a los grupos armados ilegales a entrar a una verdadera negociación política o a desmantelarse.
3. Romper, en todos los eslabones de la cadena, la libertad y habilidad de los narcotraficantes para desarrollar su negocio y con ello avanzar hacia la eliminación del narcotráfico en Colombia.
4. Formar una Fuerza Pública moderna, con los más altos estándares éticos y morales, que cuente con la confianza y el apoyo de la población.
5. Desarrollar la Doctrina de Acción Integral, a través del esfuerzo combinado de la fuerza legítima, la política social y las acciones de las demás instituciones del Estado y la sociedad civil (Departamento Nacional de Planeación, 2007:46).

La intención del PNCT se enmarcó así, en continuar con: a) la lucha contra los grupos armados al margen de la ley; b) la política antinarcóticos y c) poner en ejecución el Plan de Acción Integral, donde, asegurada la zona de conflicto, se hace manifiesta la presencia institucional con la cual se busca llevar adelante los lineamientos de recuperación social de los territorios sometidos a los dos anteriores ítems. Lograr lo planteado por el PNCT implicaba pues, un gran esfuerzo por parte del Estado. Para lo anterior, La Organización de Estados Americanos, en una de sus sesiones respecto al Plan de Consolidación de la Macarena (Departamento del Caquetá), identificó tres grandes fases que comprometían acciones institucionales en diferente magnitud; esperando que la integralidad de esas fases coadyuvara en la superación de los ejes problemas:

Gráfico 3. Núcleos básicos de la PNCT



Fuente: Diapositiva *Metas Globales por Fases*. (Organization of American States, OAS. 2010. 7)

A diferencia de la PDSO implementada en el primer cuatrienio del presidente Uribe, donde el factor de seguridad llevaba intrínseco una recuperación e inmediato uso de la fuerza legítima, el PCNT atiende otras dimensiones que yacían doblegadas al uso de la fuerza estatal. En ese sentido, se puede notar en el anterior cuadro que se corresponde la fase 1 (Atención de Emergencia) con el Ítem enfático de Seguridad Territorial, en el marco de “mitigar los efectos de la violencia”; luego se presenta la fase 2 (Transición) con la cual se comienza a priorizar la Protección al Ciudadano y, por último, pero no menos importante, se presenta la fase 3 (Estabilización), con la cual se busca integrar las poblaciones que comprenden los Centros de Coordinación y Acción Integral (CCAI) a las dinámicas sociales y económicas de la esfera nacional. En resumen, lo que se muestra es que mientras en la fase 1 el factor seguridad era esencial y quien debe garantizar la efectiva entrada de las demás instituciones del Estado al ruedo del PNCT, en la fase 3 se estipuló un interés orientado

al ámbito social y económico de las poblaciones afectadas (Plataforma de Organizaciones de Desarrollo Europeas en Colombia, 2011:51).

No obstante, aún cuando hoy se tiene claro cómo ejecutar el PNCT, lo puntual es que solo hasta 2009, se comenzó efectivamente a observar una política seria en lo legislativo que comprometiera de lleno la institucionalidad del Estado. Con la Directiva Presidencial No. 01 de 2009, se obtuvo una definición concreta de lo pretendido por el PNCT:

El Plan Nacional de Consolidación Territorial es un proceso coordinado, progresivo e irreversible, por medio del cual se busca afianzar la articulación de los esfuerzos estatales para garantizar de manera sostenible un ambiente de seguridad y paz que permita el fortalecimiento de las instituciones democráticas, en beneficio del libre ejercicio de los derechos ciudadanos y de la generación de condiciones para su desarrollo humano.

Para avanzar en la consolidación sostenible de forma más eficiente, efectiva e integral se propone continuar con la Acción Inter-Agencial como herramienta de actuación rápida y dinámica para producir los resultados esperados, incrementar la confianza y credibilidad de los ciudadanos en el Estado, a través de: planeación conjunta y en paralelo, acciones colectivas y ejercicios de coordinación de las múltiples instituciones que participan en la implementación de la estrategia.

En esta directiva fueron planteadas las áreas que componen el PNCT, con lo cual se complementaron las acciones iniciadas, desde 2002, en zonas neurálgicas del país en materia de seguridad, como son: La Macarena (Departamento del Caquetá) y Montes de María (Departamento de Córdoba). Las áreas a considerar dentro del PNCT, se dividen en tres. En primer lugar, se toman las zonas de mayor importancia para comenzar con el Plan; luego se esbozan las áreas que, si bien son de esencial tratamiento por dicho Plan, no representan un papel muy relevante como las primeras, es decir, se necesita de acciones más específicas; y en tercer lugar, se tienen las áreas complementarias, con las cuales se *consolida* lo planteado por la PDS. (Ver Gráfico 4)

Gráfico 4

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS CENTROS DE CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL
Directiva Presidencia 01 de 2009



Fuente: Elaboración propia con información de la Directiva Presidencial No. 01. (Presidencia de la República, 2009).

La Directiva solo presenta, de manera simple, la organización administrativa que da vida al PNCT. Entre sus instancias se encuentran: El Consejo Directivo y el Comité Ejecutivo. Será únicamente con la entrada en vigencia del Decreto No. 2933 del año 2010, por parte de la Presidencia de la República, que realmente se dé una estructuración al Plan y se dicte la creación del Sistema Administrativo Nacional de Consolidación Territorial (SANCT). Dicho sistema, dice el decreto,

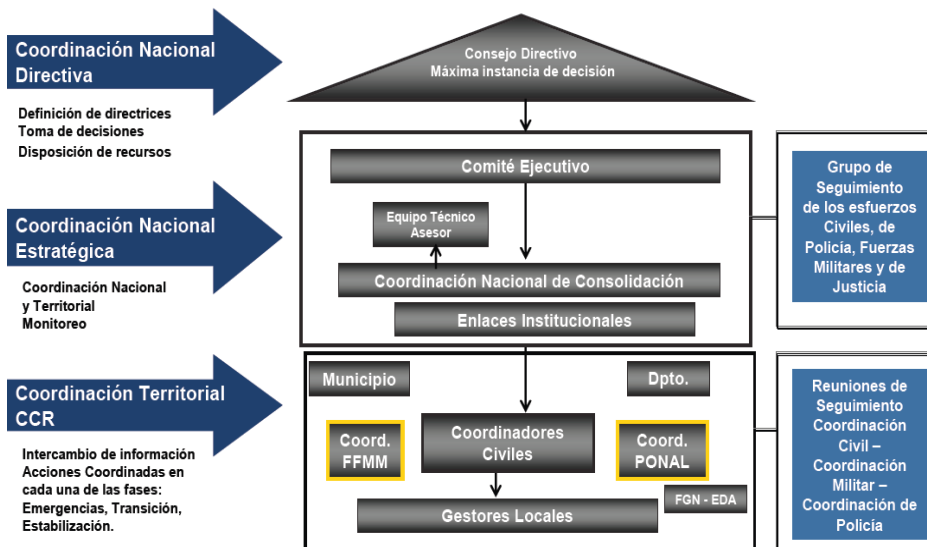
servirá como marco de coordinación político y técnico de las actividades y gestiones que deben ser cumplidas por los organismos y entidades estatales y, eventualmente por los particulares, orientadas a implementar una estrategia integral de presencia institucional y prestación de los servicios del estado en zonas focalizadas del país. La estrategia de consolidación involucra la formulación interinstitucional de planes y la ejecución conjunta, complementaria y secuencial de las acciones de seguridad y desarrollo, así como su seguimiento y evaluación (Presidencia de la República, 2010: Art. 2).

Este decreto permitió dar al SANCT una estructuración orgánica más elaborada y acompañada interinstitucionalmente; conformado inicialmente por: a) La Comisión Intersectorial de Consolidación Territorial (CT); b) El Comité Ejecutivo de la CT y; c) La Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de CT (Presidencia de la República, 2010: Art. 4). *Grosso modo*, en el Gráfico 5 se ilustra la forma operativa que constituye, a la fecha, el SANCT.

Ahora bien, lo expuesto hasta el momento hace parte de los lineamientos generales que dieron vida al Sistema Administrativo Nacional de Consolidación Territorial. La idea, a partir de este momento, será observar su ejecución en el Departamento de Antioquia, principalmente en el Centro de Consolidación Regional de Bajo Cauca.

Establecida la Directiva Presidencial No. 01, se decidió, para el 28 de abril del mismo año, conformar el Centro de Fusión Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño, regulado bajo la Circular Departamental No. 233 del 2 de septiembre de 2009.

Gráfico 5. Estructura orgánica del SANCT



Fuente: Diapositiva *Operatividad (Estructura General)*. (OAS, 2010:5).

Con la conformación de este Centro de Fusión se busca, en tres subregiones del departamento, “propiciar la presencia integral y permanente del Estado en zonas específicas a fin de establecer las condiciones necesarias que hagan posible el desarrollo económico, social e institucional de los municipios focalizados, consolidar la política de Seguridad Democrática; y lograr la vigencia del Estado de Derecho en los municipios foco de intervención” (Gobernación de Antioquia, 2009). Es de recordar que la acción a nivel departamental se sustenta en la línea estratégica No. 1 del Plan Departamental de Desarrollo 2008-2011, ¡Antioquia para todos, manos a la obra! En esta línea se esboza el siguiente programa:

Programa 11: Implementación de un Centro de coordinación integral

Una vez garantizadas las condiciones de seguridad por parte de la fuerza pública, la Gobernación de Antioquia apoyará la

ejecución de una Política Integral de Consolidación Territorial, la cual busca restablecer el funcionamiento normal de la administración de justicia, fortaleciendo la democracia local, la atención a las necesidades más urgentes de la población, la extensión de los servicios del Estado y el inicio de proyectos productivos sostenibles de mediano y largo plazo. Para esto, se implementará un centro de coordinación integral con el concurso de las diferentes Secretarías Departamentales y demás entidades que participen en los proyectos de atención integral. Las acciones cívico militares y campañas de carácter comunitario con presencia de la fuerza pública serán factores fundamentales para lograr la cooperación de la comunidad con sus autoridades legítimas (Gobernación de Antioquia, 2008:33).

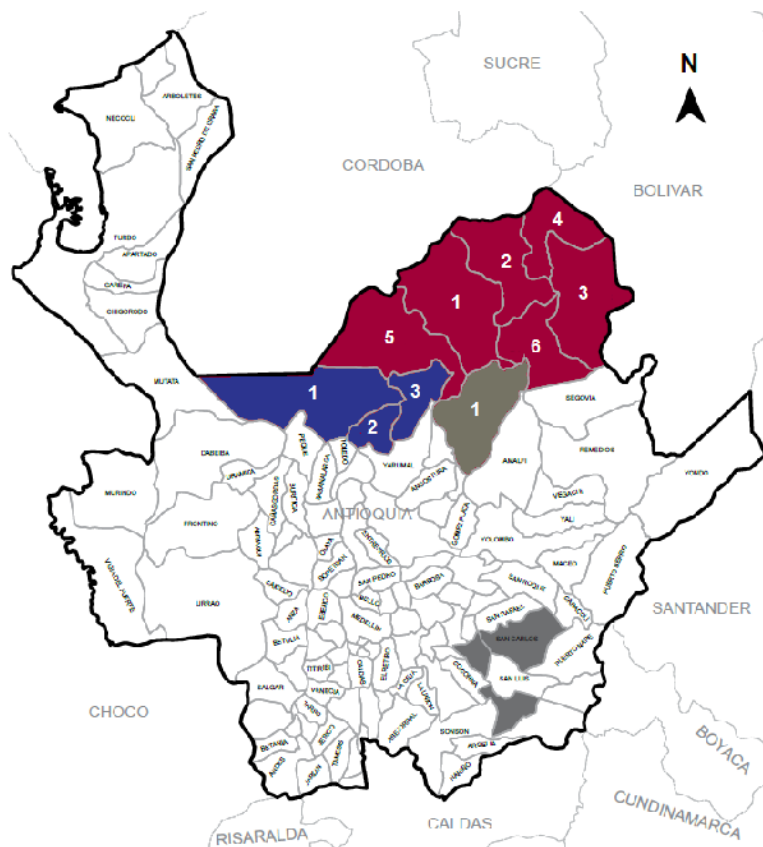
La llegada del presidente Juan Manuel Santos (2010-2014), trajo consigo innumerables incógnitas acerca de cómo se seguiría ejecutando la PDSD. En junio de 2011, con la expedición del Plan Nacional de Desarrollo, PND, Art. 26: “Fortalecimiento de la Consolidación Territorial”, el actual mandatario dejó entrever la postura gubernamental, de cara a la reconfiguración de las dinámicas de violencia en determinadas zonas del país. Así pues, el PND dispone que entre 2010 y 2014:

el direccionamiento estratégico de la Política Nacional de Consolidación Territorial será responsabilidad del Consejo de Seguridad Nacional. El Gobierno Nacional creará y fortalecerá los mecanismos institucionales de gerencia y coordinación civil del orden nacional y regional para su implementación, aprovechando y fortaleciendo las capacidades del Centro de Coordinación de Acción Integral de la Presidencia de la República (CCAI) y sus Centros de Coordinación Regionales (CCR). (Congreso de la República de Colombia, 2011: Art. 26).

En ese orden de ideas, y con el contexto y los lineamientos claros y acordados entre la esfera nacional y departamental, se instaló el Centro de Fusión del BCNN⁵ compuesto por los siguientes municipios:

5 Hoy conocido como *Centro de Consolidación Regional de Bajo Cauca*.

Gráfico 6



Fuente: Adaptado de la gráfica *Focalización Geográfica PNCT Bajo Cauca Antioqueño* (Palou & Arias, 2011b:3).

- ◆ Municipios del Nordeste
 1. Anorí
- ◆ Municipios del Norte
 1. Briceño
 2. Ituango
 3. Valdivia
- ◆ Municipios del Bajo Cauca
 1. Cáceres
 2. Caucaía
 3. El Bagre
 4. Nechí
 5. Tarazá
 6. Zaragoza

Descrita hasta este punto la estructuración del Plan Nacional de Consolidación y la territorialidad perteneciente al Centro de Consolidación Regional de Bajo Cauca, en los próximos párrafos se realizará un breve análisis de lo experimentado por este CCR desde su creación.

Como bien se dejó claro en páginas anteriores, el CCR Bajo Cauca nació tras los esfuerzos de integración entre las entidades departamentales y las instituciones de carácter nacional. También se hizo mención de los municipios que actualmente integran este Centro de Consolidación. Cabe resaltar que inicialmente este Centro de Consolidación yacía pensado de manera más amplia, puesto que comprendía zonas del sur del Departamento de Córdoba; no obstante hoy, con la cristalización del Plan Nacional de Consolidación Territorial, se logró desvincular estas zonas de dicho departamento y crear, en su lugar, un segundo Centro de Consolidación Regional. Este último comprende cuatro municipios del sur del departamento de Córdoba: Puerto Libertador, Valencia, Montelíbano y Tierralta (Palou & Arias, 2011a:2).

Ahora bien, política y legislativamente se nota cierta claridad en el diseño, primero de la Política de Seguridad Democrática y segundo, lo atinente a la planeación de las estrategias de consolidación de la misma. Sin embargo, se tendrá que aceptar que las actuales dinámicas de violencia que envuelven nuevamente el territorio nacional están mucho más allá de los planteamientos, estrategias y lineamientos, tanto nacionales como territoriales, esbozados en las diferentes políticas hasta el momento mencionadas.

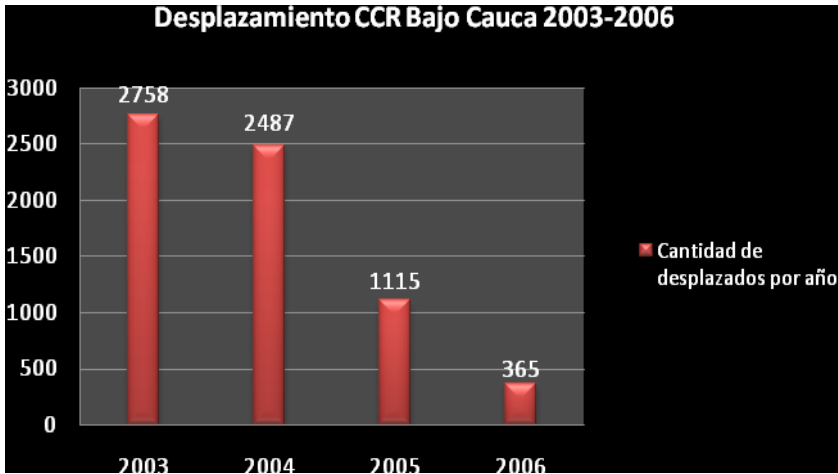
Para ejemplificar lo anterior, se pondrán en consideración indicadores que muestran los resultados alcanzados por las acciones estatales dispuestas para mitigar la presente situación conflictiva que atraviesa el país –concretamente en términos de la reorganización territorial a causa del desplazamiento forzado–. Ello nos permitirá tener una panorámica más amplia de la reconfiguración del conflicto en las subregiones del departamento de Antioquia dispuestas para el análisis.

Para comenzar, la Política de Consolidación de Seguridad Democrática (PCSD) surge a raíz de lo acontecido en los primeros cuatro años del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, como bien ya se planteó. Lo

particular, a partir del proceso de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) es que, en primera instancia, el gobierno optó por un cambio de discurso en el cual comenzó a hablar de un *posconflicto*, todo a raíz de las desmovilizaciones realizadas por los grupos paramilitares y por los golpes realizados a las diferentes estructuras guerrilleras, que aun cuando las debilitó, no terminó con ellas.

Prueba de los resultados alcanzados en el primer gobierno de Uribe se puede observar en las tasas de desplazamiento forzado en ciertas zonas del país.⁶ Así las cosas, con la PDS se observa un descenso progresivo de las tasas de desplazamiento forzado en zonas que comprenden el CCR de Bajo Cauca:

Gráfico 7

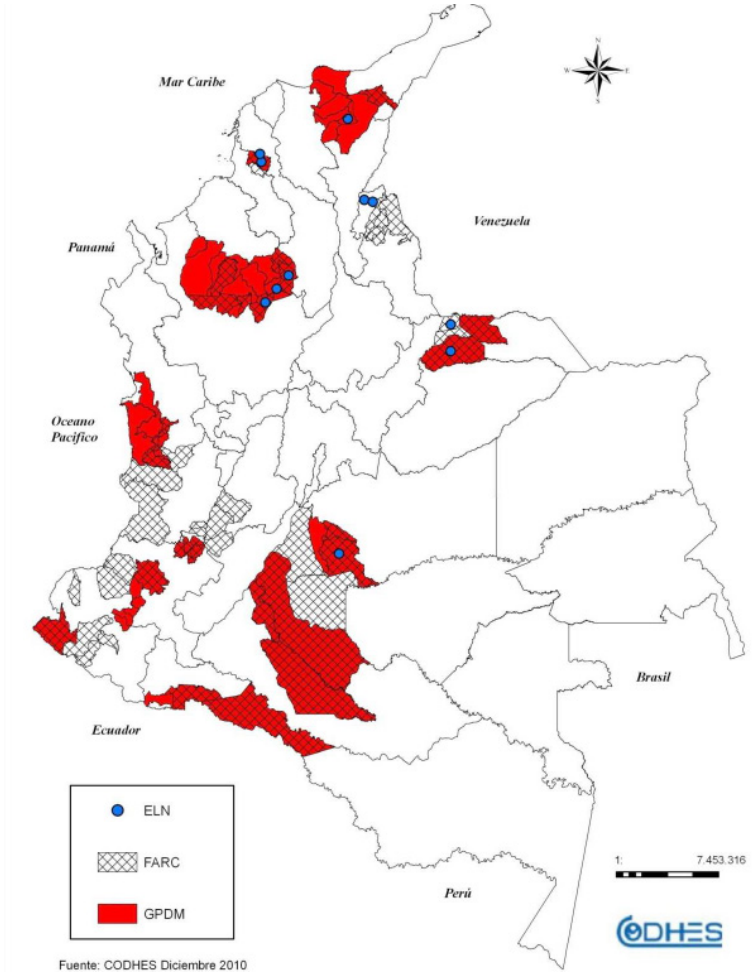


Fuente: Elaboración propia con datos de *Desplazamiento CCAI Bajo Cauca Antioqueño 1999-2010*. (CODHES, 2011:22).

Si se entiende que una de las crisis humanitarias más significativas que afronta el país en materia de Derechos Humanos es el desplazamiento forzado (DF), y nos detenemos a observar el gráfico anterior, se puede

6 Para el presente informe se trabajará principalmente con las cifras correspondientes a la territorialidad del Centro de Consolidación Regional de Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño.

Gráfico 8. MAPA DE PRESENCIA DE GRUPOS ARMADOS ILEGALES
Zonas con Centros de Consolidación Territorial



Fuente: *Mapa de presencia de grupos armados ilegales en zonas CCAI.* (CODHES, 2011:28).

constatar que en el período 2003-2006, las tasas de DF bajaron considerablemente, hasta el punto que se pasó de 2.758 casos, en 2003, a 365, en 2006. Consecuentemente, se puede notar que este período es el que comprende directamente el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, teniendo presente que las subregiones Norte y Bajo Cauca del departamento de Antioquia, fueron epicentros de sus acciones durante largo tiempo. A simple vista entonces, la PDSO alcanzó importantes resultados, frente a los objetivos presupuestados para estas zonas.

En párrafos anteriores se presentaron algunas consideraciones respecto a por qué el proceso de desmovilización paramilitar trajo consigo una reestructuración del mapa de conflicto en muchas de las zonas que entre 2002 y 2006 habían generado grandes resultados. Así, el surgimiento de las *Bacrim*⁷ y el no exterminio completo de las organizaciones guerrilleras (Eln y Farc) llevó a una redefinición de los flujos de poder, donde, por ejemplo, las disputas entre los grupos de *Los Urabeños*, *Los Rastrojos*, *Las Águilas Negras* y *Los Paisas* han recrudecido en gran medida las actuaciones y tácticas de control territorial de los paramilitares. Se comprende de antemano el hecho de que las *Bacrim* están esencialmente relacionadas con paramilitares y ex paramilitares rearmados.⁸

El Informe realizado por parte de la Consultoría para los Derechos Humanos y Desplazamiento, CODHES, en 2010, nos provee un mapa de conflicto, con el cual podemos entrar a contravenir los resultados que en materia de seguridad se habían manifestado entre 2006 y 2007. Así, se podrá constatar la presencia de los diversos grupos armados que hoy se disputan los mismos territorios donde hay presencia de los Centros de Coordinación Territorial:

El gráfico anterior devela la gran influencia que los distintos grupos armados al margen de la ley (GAML) tienen en zonas CCR. Particularmen-

7 Considerese principalmente el surgimiento de las Bandas Criminales ERPAC (Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia) con presencia mayoritariamente en el Departamento del Meta y Guaviare; *Los Rastrojos*, *Los Paisas*, *Las Águilas Negras*, *Los Urabeños*, *Héroes de Castaño* y *La Oficina de Envigado*, todas estas con presencia en el Departamento de Antioquia.

8 Ver: Palou & Arias, 2011b:7-11

te en la territorialidad del CCR de Bajo Cauca se tiene actualmente presencia de los bloques 5, 18, y 36 de las FARC. Frente a ello, la Corporación Nuevo Arco Iris, presenta con especial preocupación el nuevo aire que las FARC tiene en la región: “En el bajo Cauca antioqueño era reducida la presencia de las FARC hacia el final de la desmovilización paramilitar. Sus frentes 5 y 36 no sumaban los 100 combatientes, al tiempo que el más fuerte, el Frente 18, no superaba los 80. Esto cambió en 2008, cuando los tres frentes contabilizan al menos 750 hombres, un crecimiento del 400%” (Ávila & Núñez, 2008:60). Igualmente, alertó CODHES que “Durante 2010, en 62 de los 86 municipios de las zonas CCAI seguían operando por lo menos ocho grupos paramilitares (entre antiguos, rearmados y nuevas estructuras), mientras que las Farc mantuvieron o reactivaron su presencia en 30 municipios y el Eln siguió actuando en otros cuatro” (CODHES, 2011:28).

Respecto del Eln se podrá decir que a pesar de que ha “reducido sus acciones en el territorio nacional, sigue siendo una guerrilla con presencia en varios departamentos y municipios del país. Se le calculan 2.500 combatientes... Actualmente, la jefatura de esta organización está integrada por Nicolás Bautista (alias ‘Gabino’), Israel Ramírez Pineda (alias ‘Pablo Beltrán’), Pedro Cañas Serrano (alias ‘Oscar Santos’) y Rafael Sierra Granados (alias ‘Ramiro Vargas’)” (CODHES, 2011:81-82).

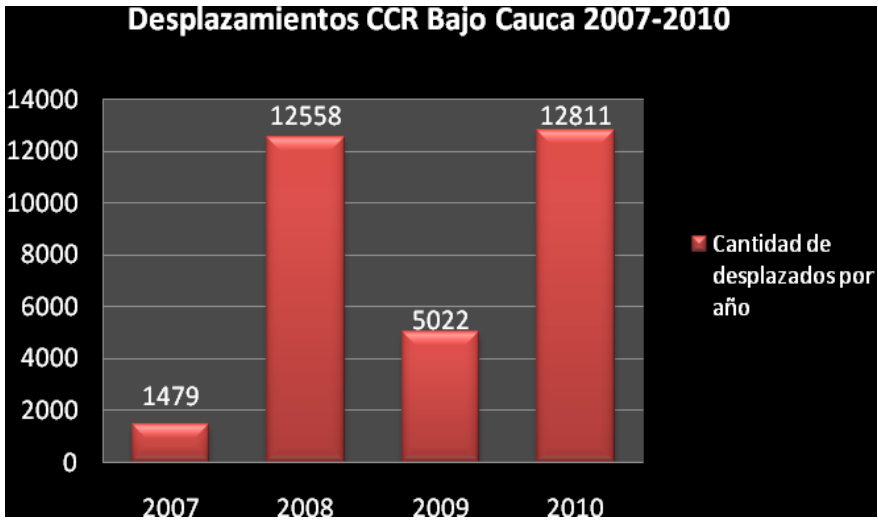
En términos generales “algo no está funcionando en ese modelo de consolidación, [puesto que] en 72 por ciento hay grupos paramilitares y en 35 guerrilla”, dijo el director de CODHES, Jorge Rojas.

Uno de los aspectos que más llama la atención del estudio es que un porcentaje importante de los desplazados (32,7 por ciento) han salido de zonas donde el gobierno emprendió desde 2007 el ‘plan nacional de consolidación territorial’, o Centros de Coordinación y Atención Integral (CCAI), programas que tienen incidencia en 86 municipios en 17 departamentos, los cuales el ex presidente Uribe consideró prioritarios para recuperar la seguridad y avanzar en inversión social y empresarial (Verdadabierta.com, 2011).

Al entrar y mirar las cifras de desplazamiento forzado brindadas por el informe anual de CODHES, para 2010 existía una realidad puntual acer-

ca de este flagelo en zonas en las cuales encontramos Centros de Consolidación Territorial. Así, se podrá notar, en el siguiente gráfico, cómo las cifras de desplazamiento forzado comienzan nuevamente a aumentar a partir de 2006, justo en el período clave de florecimiento de las *Bacrim*:

Gráfico 9



Fuente: Elaboración propia con datos de *Desplazamiento CCAI Bajo Cauca Antioqueño 1999-2010*. (CODHES, 2011:22).

Después de los logros alcanzados por la PDSD entre 2003 y 2006, las tasas de desplazamiento se recrudecen, mostrando el ascenso desbordado en 2008, donde 12.558 víctimas dejaron atrás los planteamientos reales de consolidación territorial. Si bien esta tasa bajó para 2009 al reportarse 5.022 casos, nuevamente ascendió a más del doble con 12.811 casos para 2010.

Cifras como las presentadas hasta el momento, confrontan lo expuesto por entidades del Estado como Acción Social. Para esta entidad es un gran logro lo alcanzado hasta el momento en materia de “recuperación social del territorio”, puesto que no solo se enfoca en la militarización de las zonas CCAI, sino que se complementa con acciones de carácter civil.

Se puede apreciar lo anterior a partir de lo siguiente:⁹

1. En 2010 se invirtieron más de 697 mil millones de pesos, lo que sirvió para gestionar 1.051 proyectos de desarrollo social, 256 de infraestructura y 324 de desarrollo económico. Así mismo se realizaron 896 misiones humanitarias, 116 jornadas interinstitucionales y se entregaron 181 donaciones por valor de \$15.397 millones. Por otra parte, más de 3.290 predios –248.958 hectáreas– pertenecientes a familias desplazadas fueron protegidos.
2. Con el trabajo del CCAI el año anterior, la cobertura en salud en los 95 municipios focalizados aumentó hasta el 92,5 por ciento. Programas como el de Familias en Acción subieron hasta el 82 por ciento y la cobertura de educación alcanzó el 103,7 por ciento.
3. Los desplazamientos se redujeron de 15 personas a seis personas por cada mil habitantes de la región.
4. Un estudio realizado por el CCAI en 40 de los municipios focalizados, permitió ver un cambio en la percepción que tienen sus habitantes respecto a la oferta del Estado, lo que generó que un 60 por ciento de los habitantes manifestaran confianza en las instituciones estatales, mientras que el 83 por ciento considerara que la seguridad en la zona ha mejorado.
5. El 85 por ciento de los habitantes ha visto una mejora en los servicios educativos, mientras que el 53 por ciento percibe mejora en los servicios de salud. En el tema de fortalecimiento de la gobernabilidad regional, el 49 por ciento de los encuestados ha hecho parte de una instancia de participación social y comunitaria de su municipio.

Con todo lo anterior, el escenario a tener en mayor consideración tiene que ver con el tema del *retorno*, al mostrarse que 13.149 hogares –aproximadamente 53 mil personas– retornaron a sus lugares de origen, lo que equivale a 35% del total de retornos en el país.

9 Los siguientes datos se presentan a partir de un reportaje noticioso presentado por Acción Social en su página oficial. Ver: Acción Social, (s. f.).

Sin duda, cuando se trata de entablar comparaciones entre las cifras dispuestas por el Estado y las que ofrecen las distintas organizaciones no gubernamentales, encontramos que cada entidad presenta resultados que avalan su fin misional, lo cual –en la mayoría de las veces– se presta para confusiones (por los desfases de los datos, por ejemplo), dificultando así la certeza sobre la realidad del asunto; sin embargo, constituyen un insumo importante para ampliar la panorámica de un problema –los cambios existentes en las dinámicas de violencia– que parece adaptarse sin mayores traumas a las acciones dispuestas por el ente estatal.

Lo expuesto aquí sirve para poner en evidencia que mientras el Estado continúa su línea expuesta en el Plan Nacional de Consolidación Territorial, nuevos contextos y realidades en dichos territorios minan lo dispuesto y, en cambio, se presentan como insumos para modernizar las estrategias que permitan redimensionar y redireccionar las acciones necesarias para llevar a cabo la “recuperación social del territorio”.

Actualmente, las zonas CCAI –y otras zonas del país–, vienen presenciando una reestructuración de las dinámicas de violencia que históricamente las ha rodeado. Así, observar los convenios y acuerdos a los que han llegado grupos armados ilegales de distinta naturaleza, permite poner en tela de juicio los principios fundantes de distintas agrupaciones armadas (como el ELN que ha realizado acuerdos con ciertos frentes de las Farc y la Banda Criminal *Los Rastrojos*); las cuales hoy se ven enfrentadas con bandas criminales de distinta índole, que bien provienen de las estructuras antiguas, rearmadas o nuevas, de los antiguos paramilitares; pero que a la final están ligadas a las formas de control territorial, a las fuentes y formas de financiación, y a la diversidad de tácticas de consolidación de poder económico, e incluso político en ciertas regiones.

Algo está claro frente a la PNCT y al direccionamiento que el gobierno de Juan Manuel Santos quiera dar a éste. No estamos lejos de 2004 o 2005, cuando se concentró el esfuerzo para pensar el PNCT; sin embargo, estamos lo suficientemente lejos en este momento para pensar que los planteamientos de cinco años atrás sean efectivos y eficaces para afrontar las problemáticas más inmediatas. Las nuevas estrategias traídas por los grupos armados y estructuras criminales, contemplan menos accio-

nes bélicas (siendo estas los tradicionales soportes de la cristalización del poderío paramilitar y guerrillero en el siglo XX); ahora las formas varían y para las autoridades cada vez es más frágil y delgada la línea entre lo legal y lo ilegal. Las potencialidades económicas de carácter regional se vuelven botines de disputa armada por parte de estos grupos, que idean todo tipo de estrategias para ubicar allí fuentes de financiación que generalmente desbordan la capacidad del Estado para hacer frente.

Ahora falta esperar qué directrices tomará el actual gobierno para luchar contra todo este tipo de problemáticas que, de no ser afrontadas debidamente y a la mayor brevedad posible, se pueden convertir en un drama mucho peor que el sufrido a finales de la década de los noventa, cuando las acciones paramilitares y guerrilleras, generaron, quizás, las consecuencias más dramáticas para el país.¹⁰

Pensar en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), recientemente aprobada y que entrará en vigencia en los primeros meses de 2012, sólo deja cuestionamientos, acerca de qué tan eficaz será esta ley cuando el país yace nuevamente desbordado de inseguridad y violación cabal a los DD. HH. y el DIH.

Conclusiones

La ejecución del Plan Nacional de Consolidación Territorial presenta hoy un escenario problemático en las regiones donde, desde 2002, se habían concentrado las acciones de recuperación social e integral del territorio. En esa medida, el discurso de *posconflicto* generado gracias a los logros resultantes del proceso de desmovilización paramilitar después de 2005, se encuentra hoy en discusión; ya que la pérdida de control por parte de

10 Al respecto, considérese la grave situación en materia de seguridad registrada los días 5 y 6 de enero de 2012, cuando por amenazas del grupo *Los Urabeños*, en retaliación por la muerte de su líder Juan de Dios Úsuga, alias Geovanny, se vieron paralizadas las actividades de comercio y transporte en cinco departamentos (Antioquia, Córdoba, Chocó, Magdalena y Sucre) y, principalmente, dos comunas de Medellín (Comuna 13 -San Javier- y el Popular 1 -Comuna 1-). Situación que puso en jaque los más recientes planteamientos por parte del Gobierno Nacional con relación a la lucha contra las *Bacrim*. (El Colombiano, 2012:10A-12A).

los grandes líderes de estas agrupaciones ilegales en determinadas zonas estratégicas del país, conllevó a una redefinición del mapa de conflicto, promoviendo la proliferación de nuevas y/o renovadas estructuras criminales, hoy conocidas en su mayoría como *Bacrim*.

La creación de los Centros de Consolidación Regional (CCR) en las catorce zonas estratégicas identificadas para la implementación del Sistema Administrativo Nacional de Consolidación Territorial (SANCT), proporciona una realidad paradójica frente a los objetivos inicialmente trazados, puesto que, a la luz de 2011, son precisamente estos territorios donde hay más presencia de organizaciones criminales al margen de la Ley,¹¹ lo cual se encuentra estrechamente vinculado con la grave crisis en materia de reconocimiento, garantía y reparación de los Derechos Fundamentales vulnerados a las poblaciones de estas subregiones del Departamento de Antioquia.

El análisis de caso traído a colación sobre la variabilidad en las tasas de *Desplazamiento Forzado* entre 2003 y 2010, expone la ignominiosa situación afrontada en los municipios que comprenden el CCR de Bajo Cauca; donde, para 2010, fueron registrados 12.811 casos de desplazamiento. Situación que hoy pone en jaque los lineamientos establecidos desde 2007 en adelante, y que tienen que ser objeto de fortalecimiento y, de ser necesario, de rediseño por parte del gobierno nacional; pues de no ser oportunamente ejecutados, permitirán que situaciones como el paro comercial y transportuario, en enero de 2012, impuesto por amenazas de la *Bacrim Los Urabeños* en localidades de cinco departamentos del país, se convierta en el nuevo *modus vivendi* de decenas de localidades.

Faltará que la reestructuración del SANCT se ajuste a las nuevas realidades de conflicto en el país; una reestructuración que cuente con las nuevas estrategias de poder y control territorial que los grupos armados ilegales manifiestan, donde la delgada línea entre lo legal y lo ilegal, más el ausentismo del Estado en determinadas zonas del país, terminan permitiendo la pervivencia de estas estructuras que hoy no se esconden en

11 Considérese la presencia, en Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño, de los frentes 5, 18, 36 y 57 de las Farc, diversos frentes del Eln, y Bandas Criminales como: *Los Paisas*, *Los Rastrojos* y *Los Urabeños*, principalmente.

los montes; sino que interactúan con la población, haciendo mucho más compleja la relación entre entidades del Estado –como la Policía– y la población civil.

Bibliografía

- Acción Social. (s.f.). “Consolidación Territorial en 95 Municipios Colombianos”. Bogotá. Consultado el 13 de diciembre de 2011. Versión online en: <http://www.accionsocial.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=5792&catID=127>.
- Ávila, M. F. & Núñez G., M. P. (2008). “Expansión territorial y alianzas tácticas”. En: *Revista Arcanos* (14). Consultado el 2 de Diciembre de 2011. Versión online En: http://www.nuevoarcoiris.org.co/sac/files/arcanos/arcanos_14_diciembre_2008_files/arcanos_14_informe_alianzas_Farc.pdf
- Congreso de la República de Colombia. (2005). Ley 975. Bogotá.
- _____ (2011). Ley 1450. Bogotá.
- Consultoría para los Derechos Humanos y Desplazamiento (CODHES). (2011). *¿Consolidación de qué? Informe sobre desplazamiento, conflicto armado y derechos humanos en Colombia en 2010*. Boletín No. 77. Bogotá. Consultado el 23 de agosto de 2011. Versión online en: <http://www.codhes.org/images/stories/pdf/bolet%20C3%ADn%2077.pdf>
- Departamento Nacional de Planeación (2007). *Plan Nacional de Desarrollo, Estado Comunitario: desarrollo para todos* (Tomo I). Bogotá: Diario Oficial No. 46.700.
- El Colombiano.com. (2011, 10 de noviembre). *Los daños de una minería ilegal*. Consultado el 10 de noviembre de 2011, en: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/los_danos_de_una_mineria_ilegal/los_danos_de_una_mineria_ilegal.asp
- El Colombiano. (2012, 6 de enero). *Jornada de Parálisis y miedo en 5 departamentos*.
- Escobedo D. L. (2009). *Dinámica de Violencia en el Departamento de Córdoba 1967-2008*. Observatorio del Programa Presidencial de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional humanitario. Bogotá: Ochoa Impresos Ltda.
- Giraldo R. J. (Ed.). (2011). *Economía Criminal en Antioquia: Narcotráfico*. Medellín, Colombia: Pregón Ltda.
- Gobernación de Antioquia (DAP). (2008). Plan de Desarrollo “Antioquia Para Todos, ¡Manos a la Obra!” Período 2008-2011. Medellín, Colombia.
- Gobernación de Antioquia (2009). Circular No. 233. Medellín, Colombia.

- Macías, J. (2011, 11 de julio). *Guerrilla y Bacrim, de la mano en Antioquia*. *El Colombiano*. Consultado el 16 de diciembre de 2011. Versión online en: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/G/guerrilla_y_bacrim_de_la_mano_en_antioquia/guerrilla_y_bacrim_de_la_mano_en_antioquia.asp
- Montes, O. (2011, 22 de marzo). "Después no digan que no se les advirtió". En: *Pensamientocolombia.org*. Consultado el 28 de octubre de 2011, en: <http://www.pensamientocolombia.org/DebateNacional/?p=30694>
- Organization of American States (OAS). (2010). *Plan Nacional de Consolidación Macarena, Centro de Coordinación y Acción Integral Colombia*. Washington D. C.: Comisión interamericana para el control del abuso de drogas (CICAD). Consultado el 28 de noviembre de 2011. Versión online en: <http://www.cicad.oas.org/apps/Document.aspx?Id=988>
- Palou, J. C. & Arias, G. (2011A). *Balance de la Política Nacional de Consolidación Territorial*. Bogotá: Fundación Ideas para la Paz. Consultado el 7 de octubre de 2011. Versión online en: <http://www.ideaspaz.org/portal/images/consolidacion-web.pdf>
- _____ (2011B). "Plan de Consolidación Territorial en el Bajo Cauca". En: *Balance de la Política Nacional de Consolidación Territorial*. Bogotá: Fundación Ideas para la Paz. Consultado el 8 de octubre de 2011. Versión online en: <http://www.ideaspaz.org/portal/images/stories/pdfs/bajocaucaweb.pdf>
- Plataforma de Organizaciones de Desarrollo Europeas en Colombia (PODEC). (2011). *Análisis del Plan de Consolidación de Montes de María. Una mirada desde el desarrollo, la democracia, los derechos humanos y la cooperación internacional*. Bogotá: Editorial CÓDICE Ltda. Consultado el 12 de diciembre de 2011. Versión online en: <http://ccai-colombia.org/files/primarydocs/201103pode.pdf>
- Presidencia de la República. (2009). Directiva Presidencial 01. Bogotá.
- _____ (2010). Decreto No. 2933. Bogotá.
- Romero, V. M. & Arias, O. A. (2008). "Bandas Criminales, Seguridad Democrática y Corrupción". En: *Revista Arcanos* (14). Consultado el 8 de diciembre de 2011. Versión online en: http://www.nuevoarcoiris.org.co/sac/files/arcanos/arcanos_14_diciembre_2008.htm
- Verdadabierta.com (2011, 16 de febrero). *Desplazamiento: el desangre continúa*. Consultado el 13 de noviembre de 2011, en: http://www.verdadabierta.com/index.php?option=com_content&id=3044
- _____ (2011, 6 de junio). *¿Neoparamilitarismo?* Consultado el 28 de octubre de 2011, en: http://www.verdadabierta.com/nunca-mas/index.php?option=com_content&id=3308